



Al contestar cite este número:
Radicado DADEP No. 20263010007511

20263010007511

Bogotá D.C, 2026-01-26
301

CORREO ELECTRÓNICO

Doctor
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO
Subsecretario de Despacho Comisión Segunda Permanente de Gobierno
CONCEJO DE BOGOTÁ
Dirección: Calle 36 No. 28 A 41
Correo electrónico: comisiondegobierno@concejobogota.gov.co
Ciudad

REFERENCIA: Rad. DADEP No. 20264000013822 del 21/01/2026
Rad. Concejo de Bogotá, D. C. No. 2026EE657 del 21/01/2026

ASUNTO: Proposición No. 051 aprobadas en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno

Respetado Doctor Garzón, reciba un cordial saludo.

En atención al radicado de la referencia mediante el cual nos remite por competencia las Proposición No. 051 Tema: Gestión Distrital y Política Pública de los y las vendedores informales en Bogotá realizada por el concejal Julián Rodríguez Sastoque del partido Político Alianza Verde, este Departamento Administrativo remite respuesta desde sus competencias en los siguientes términos:

2. ¿Cómo se articula la acción de las entidades distritales entre sí y con las Alcaldías Locales para la implementación de la política pública de vendedores informales?

Respuesta: el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en el marco de sus competencias misionales, desarrolla acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto para la Economía Social –IPES– orientadas a apoyar la implementación de las políticas distritales relacionadas con el manejo integral de los vendedores informales en el espacio público.

En este contexto, esta Defensoría mantiene coordinación técnica y operativa con el IPES y las alcaldías locales suministrando información sobre el espacio público cuando es requerida, y participando en mesas de trabajo interinstitucionales que buscan garantizar la articulación entre las estrategias de defensa del espacio público y la garantía de protección de los derechos de los vendedores informales.

De esta forma, la cooperación entre la Defensoría de Espacio Público, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el IPES se enmarca en un esquema de competencias complementarias, donde cada entidad aporta desde su rol institucional para asegurar el



equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho colectivo al uso y disfrute del espacio público.

Aunado a lo anterior, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Acuerdo 812 de 2021 y como una acción concreta en el marco de la formulación de la política pública de las ventas informales, incluyó como una actividad de aprovechamiento económico permitida en el espacio público la de "Ventas Informales", en el Decreto No. 670 del 27 de diciembre de 2025, que la define como:

"Actividades de comercio y servicios realizadas en el espacio público, como medio básico de subsistencia, por vendedores informales ambulantes, semiestacionarios, estacionarios, periódicos, ocasionales o de temporada, utilizando las capacidades propias de los vendedores, elementos móviles portátiles o el propio cuerpo para transportar las mercancías, en el marco de los programas y/o proyectos que adelante el Instituto para la Economía Social -IPES-. La actividad puede incluir la utilización o no de mobiliario urbano, conforme a la definición de las entidades competentes."

A su vez, se incluyó la actividad de "Ferias Temporales" definida como:

"Actividades de comercio y servicios que se desarrollan en períodos cortos de tiempo organizados para el apoyo de ventas informales"

Designándose al Instituto Para la Economía Social – IPES como la entidad gestora de estas dos actividades al tener como población objeto a los vendedores informales, por lo que expidió las resoluciones 180 de 2025 *"por la cual se adopta el protocolo de aprovechamiento económico en el espacio público gestionado por el instituto para la economía social- IPES con relación a la actividad de ventas informales"* y 179 de 2025 *"Por la cual se adopta el protocolo de aprovechamiento económico en el espacio público gestionado por el Instituto para la Economía Social- IPES con relación a la actividad de ferias temporales"*

8. ¿En qué espacios públicos y localidades se ha implementado el Decreto 098 de 2004, el régimen de zonas especiales por condiciones de seguridad, y los procesos de recuperación del espacio público? Indicar localidad, espacio, fecha, acto administrativo y estado actual."

Respuesta: las zonas especiales tienen su fundamento normativo en el Decreto 098 de 2024 *"Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan"* definiéndose en el artículo 13:

"ARTICULO 13. Zonas Especiales. *Corresponderá a los Alcaldes Locales, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, determinar las zonas de su jurisdicción que por cuestiones de seguridad, no puedan ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales. Así mismo los Alcaldes Locales, en coordinación con el Fondo de Ventas Populares, determinarán aquellas que deben ser reservadas para desarrollar actividades comerciales, culturales o de recreación, las cuales no pueden ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales."*

Decreto hoy derogado por el Decreto 642 del 22 de diciembre de 2025, pero que su contenido se aplica en la ciudad de Bogotá, D. C., gozando de la presunción de legalidad y

encontrándose vigente, sobre este particular es preciso hacer remisión al [Concepto 2202213718 de 2022 Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Política Jurídica](#).

Tras los ejercicios iniciales de declaratoria de zonas especiales por parte de los alcaldes locales en sus jurisdicciones, la Defensoría del Espacio Público expidió la Resolución No. 250 del 16 de septiembre de 2004, mediante la cual, por primera vez se georreferenciaron las "Zonas Especiales" de todo el Distrito Capital de Bogotá, realizándose una actualización periódica por demanda atendiendo las determinaciones de cada alcaldía local, en la actualidad, el último inventario de esta naturaleza se encuentra contenido en la Resolución No. 109 del 20 de abril de 2022, señalando 471 zonas especiales clasificadas por localidad y con la información del número y fecha del acto administrativo de declaratoria.

11. ¿Cuál es el procedimiento y criterios para decretar un espacio público como zona especial por condiciones de seguridad? y "12. ¿Cuál es el procedimiento adelantado para recuperar las zonas especiales por condiciones de seguridad en Bogotá?"

Respuesta: De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 098 de 2004 hoy Decreto 642 del 22 de diciembre de 2025, la determinación de las zonas especiales corresponde a los alcaldes locales en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes revisan zonas de su jurisdicción que, por cuestiones de seguridad, flujo y aglomeración de personas, presencia de entidades bancarias, instituciones públicas, estaciones de policía, etc., no pueden ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales, procediendo a indicarlo en los correspondientes actos administrativos de declaratoria, especificando los polígonos delimitados por dirección y en algunos casos áreas de influencia.

Una vez declaradas, las zonas especiales no pueden ser ocupadas temporal y/o permanentemente, por lo que corresponde a las autoridades de policía adelantar las acciones necesarias para prevenir su ocupación y aplicar las disposiciones de la Ley 1801 de 2016.

16. Indique qué espacios públicos de las localidades de Bogotá se han recuperado durante su administración con ocasión a ventas informales, señalar fecha de recuperación, dirección y polígono exacto"

Respuesta: la Defensoría del Espacio Público no convoca ni realiza operativos de recuperación de espacio público ocupado por ventas informales, toda vez que de acuerdo con el marco competencial vigente, las funciones de inspección, vigilancia y control (IVC) sobre el espacio público corresponden a las Alcaldías Locales y a la Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 735 de 2019. Estas entidades son las encargadas de determinar y priorizar las zonas objeto de intervención, atendiendo a criterios de necesidad, afectación y disponibilidad institucional, no obstante, atendiendo la articulación interinstitucional brinda acompañamiento con su equipo de Defensores del Espacio Público en algunas de estas diligencias, precisando que dicho apoyo está dirigido a mantener un diálogo respetuoso con los diferentes actores del espacio público socializando la normatividad vigente y los comportamientos adecuados para el correcto uso y protección del espacio público.

Finalmente, es preciso señalar que la Defensoría del Espacio Público en lo que respecta a su competencia ha venido dando aplicación al Decreto 098 de 2004 derogado por el Decreto No. 642 del 22 de diciembre de 2025, muestra de ello fue la expedición de la Resolución No.

250 del 16 de septiembre de 2004, mediante la cual por primera vez se georreferenciaron las "Zonas Especiales" de todo el Distrito Capital de Bogotá, y la Resolución No. 158 del 10 de junio de 2004 que adoptó el primer inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados en cualquier tiempo, realizándose una actualización periódica por demanda de ambos inventarios atendiendo las determinaciones de cada alcaldía local, en la actualidad, los últimos inventarios de esta naturaleza se encuentran contenidos en la Resolución No. 109 del 20 de abril de 2022 y la Resolución No. 113 del 22 de abril de 2022, las cuales se pueden consultar en el siguiente vínculo: <https://www.dadep.gov.co/marco-legal/normatividad-dadep>

17. ¿Cómo ha asegurado su entidad que las intervenciones en el espacio público no vulneren los derechos fundamentales de las y los vendedores informales y qué acciones ha tomado frente a eventuales afectaciones o denuncias presentadas?

Respuesta: la Defensoría del Espacio Público es una entidad de carácter técnico que carece de funciones policivas adicionales a las establecidas en los artículos 10 y 17 del Acuerdo 735 de 2019, y que por tal motivo, presta asesoría jurídica y técnica a las demás entidades y autoridades del orden local, distrital, nacional, y judicial para el ejercicio de la recuperación del espacio público, como es el caso de las funciones policivas en cabeza de las Alcaldías Locales, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021, Acuerdo 079 de 2003, Ley 1355 de 1970 y demás concordantes, ejercer el control del espacio público y propender por su recuperación por medio del trámite de actuaciones administrativas R.B.U.P., en el mismo sentido, con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, dicha atribución recae en los inspectores distritales de policía, tramitando procesos o querellas policivas (proceso verbal abreviado art. 223 ibidem) por los comportamientos establecidos en los artículos 77 (Perturbación a la posesión o mera tenencia de bienes inmuebles), 135 (integridad urbanística) o 140 (espacio público) ibidem según sea el caso.

Por su parte, la Ley 1801 de 2016 en su artículo 140 establece los comportamientos contrarios al cuidado e integridad al espacio público, siendo aplicables a las actividades de venta informal los comportamientos de los numerales 4 y 6 del mencionado artículo "4. *Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. (...) 6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente.*", para estos, las medidas correctivas son multa general tipo 1 y multa general tipo 4; remoción de bienes respectivamente.

En el mismo sentido, determina las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de policía, así como los instrumentos jurídicos con que cuentan dichas autoridades como lo son los medios de policía y las medidas correctivas que pueden ser impuestas a las personas que incurran en comportamientos contrarios a la convivencia o que incumplan los deberes específicos de convivencia, tal es el caso, del medio de policía establecido en el artículo 164 (incautación) y la medida correctiva establecida en el artículo 187 (remoción de bienes) de la mencionada ley.

Ahora bien, dichos procedimientos se adelantan por parte de las autoridades competentes con total respecto y aplicación del desarrollo normativo que ha definido la hoja de ruta y los procedimientos a adelantar por parte del Distrito, en cumplimiento no solo de su deber legal de recuperar el espacio público, sino también de garantizar los derechos de la población dedicada a las ventas informales en concordancia con los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales como la sentencia SU 360 de 1999, T-772 de 2003, C 211 de 2017, T-201 de

2024 y T-311 de 2024 entre otras. Algunas de ellas son: el Decreto 642 del 22 de diciembre de 2025, el Decreto 670 del 27 de diciembre de 2025, Ley 1988 de 2019, el Acuerdo Distrital 092 de 2021, Acuerdo Distrital 812 de 2021, Acuerdo Distrital 896 de 2023 y la expedición del documento CONPES D.C. 32 para la "Política Pública Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales 2023-2035".

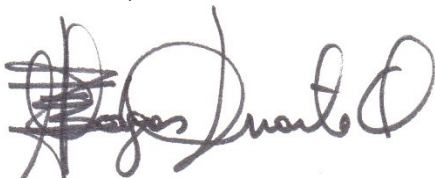
19. ¿Qué mecanismos ha implementado la entidad para la gestión de conflictos asociados al uso del espacio público y la protección de los derechos de las y los vendedores informales durante los procesos de recuperación, organización y regulación?

Respuesta: como se indicó previamente, esta Defensoría atendiendo la articulación interinstitucional brinda acompañamiento con su equipo de Defensores del Espacio Público en algunas diligencias de recuperación de espacio público convocadas por las autoridades de policía, precisando que dicho apoyo está dirigido a mantener un diálogo respetuoso con los diferentes actores del espacio público socializando la normatividad vigente y los comportamientos adecuados para el correcto uso y protección del espacio público.

De igual manera, se asiste y brinda acompañamiento a los diferentes espacios de interlocución como mesas de trabajo, reuniones y mesas de soluciones convocadas por las alcaldías locales y/o la población de vendedores informales a través de sus diferentes instancias de participación como los consejos locales y el consejo distrital de vendedores informales, en los que se suministra información técnica y jurídica sobre el espacio público, dando así claridad sobre el panorama actual sobre la normatividad vigente y aplicable para la protección del espacio público en garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas dedicadas a la venta informal.

Finalmente, es preciso indicar que, las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 por tratarse de temas puntuales relacionados con la implementación y resultados de la Política Pública para Vendedores Informales documento CONPES D.C. 32, corresponden al Instituto para la Economía Social – IPES en su calidad de entidad líder en la formulación, aplicación y seguimiento a la correspondiente política pública.

Atentamente,



EDGAR ENRIQUE DUARTE QUIROGA

Subdirector de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público

Proyectó: Carlos Mauricio Oviedo Díaz - Abogado Contratista SGIEP
Revisó: Claudia Poveda Fandiño – Profesional especializado SGIEP
Kelly Johanna Guiza Robles- Contratista-SIGIEP
Código Archivo: 300.38